



**Responder con la lucha a la
ofensiva de la patronal y la derecha**

¡NI PAZ SOCIAL NI UNIDAD NACIONAL!

**¿Hacia dónde
va el Gobierno
PSOE-UP?**

**El levantamiento
contra el racismo coloca a
Trump contra las cuerdas**

Págs. 2 y 3





**Declaración de Izquierda
Revolucionaria
Internacional**

El levantamiento social desatado tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía racista de Minneapolis ha estremecido el mundo. Su fuerza, su extensión y la determinación de los cientos de miles de jóvenes afroamericanos, latinos, blancos, asiáticos, trabajadores y activistas de la izquierda que han llenado las calles de Estados Unidos, ha colocado al Gobierno de Donald Trump contra las cuerdas. No solo ha desbaratado el toque de queda y los planes represivos de los 50.000 efectivos de la Guardia Nacional movilizadas, la oleada de protestas ha destapado la olla podrida en que se ha convertido el capitalismo norteamericano. La réplica de este maravilloso movimiento, con manifestaciones de masas en Francia, Bélgica, Gran Bretaña, Australia, el Estado español... marca un nuevo punto de inflexión en la lucha de clases.

**La lucha de clases unifica
a los oprimidos por encima
de las diferencias raciales**

El impacto de la pandemia en EEUU con más de 115.000 muertos, soportando las imágenes de fosas comunes en parques públicos, las colas kilométricas para acceder a los bancos de alimentos y una desprotección sanitaria que afecta a más de 40 millones de personas... ha colocado más material explosivo en la situación objetiva. Mientras, la Administración Trump —en colaboración con el Partido Demócrata— ha aprobado rescates billonarios a Wall Street.

La población negra ha sido el sector más golpeado por los contagios y quien ha sufrido más muertes: tres veces más posibilidades de contraer la enfermedad, y un porcentaje de fallecimientos que se eleva al 70% en grandes ciudades como Chicago. Son cifras que reflejan una realidad de pobreza y opresión racial incrustada hasta el tuétano en el sistema.

No es ninguna casualidad que hayan sido los jóvenes y trabajadores negros los que se han plantado. Lo verdaderamente extraordinario es que su llamada no solo ha conectado con la comunidad latina, asiática o inmigrante de otras partes del mundo, sino que ha encontrado un respaldo inmediato de la clase trabajadora blanca, muy especialmente de su juventud precarizada y radicalizada, y también de sectores de las capas medias empobrecidas durante la última década. Un movimiento que no entiende de razas pero sí de clases, y que ha arrollado con su acción muchos de los prejuicios pequeño-burgueses de las políticas de identidad, uniendo a los oprimidos por encima de barreras raciales o de género.

Este es el precio que la burguesía paga tras décadas de recortes sociales salvajes, y de minar su propia base social proletarizando a amplios sectores de las capas medias. Hundiéndose a niveles extremos las condiciones de vida de la clase trabajadora, extendiendo la desigualdad y la pobreza para poder mantener los beneficios de las grandes corporaciones, la plutocracia que domina Wall Street y



Un punto de inflexión en la lucha de clases de EEUU

El levantamiento contra el racismo coloca al Gobierno Trump contra las cuerdas

la Casa Blanca ha provocado un escenario de polarización social y política sin precedentes.

La declaración de guerra de Trump y su estrepitosa derrota

Cuando Trump amenazó con movilizar al ejército para sofocar las protestas declaró una guerra de la que ha salido escaldado. Ni los toques de queda, ni los gases lacrimógenos, las balas de goma o los porrazos de la Guardia Nacional han servido para frenar al movimiento. Solo han provocado más indignación y han dado a la lucha un carácter multitudinario.

Las imágenes de Minneapolis, Los Ángeles, Philadelphia, Houston, Washington, Nueva York... recuerdan a las grandes movilizaciones revolucionarias de Chile, Ecuador, Sudán, Argelia o la huelga general en Francia durante 2019. Si Trump no ha podido ir tan lejos como Piñera en Chile ha sido por la fuerza de la lucha de masas y el miedo a un estallido revolucionario de consecuencias imprevisibles, que ha convencido a un sector decisivo de la clase dominante —por boca del propio Pentágono, del Partido Demócrata e incluso de voces autorizadas del Republicano— a abortar de cuajo los planes del presidente.

El miedo de la burguesía no se ha quedado dentro de las fronteras de EEUU,

ha generado una gran preocupación internacional. Trump se ha quedado completamente solo y aislado en su estrategia. Los primeros mandatarios de Canadá, Alemania, Reino Unido o Nueva Zelanda, o el portavoz de exteriores de la UE entre muchos otros, se desmarcaban del presidente norteamericano, en un intento de mantener lo más lejos posible de sus países la onda expansiva de este estallido.

El apagado de las luces de la Casa Blanca por primera vez desde 1889 o la noticia de que Trump había sido recluido en el búnker presidencial reflejan el carácter histórico y excepcional de estos acontecimientos.

Encuestas realizadas al calor de las protestas revelaban que el 64% de la población las apoya. Pero las calles abarrotadas dicen mucho más que cualquier cifra. Frente a las minúsculas concentraciones de hace solo unas semanas de los seguidores del presidente —fusil en mano— pidiendo el fin del confinamiento, en estos días millones han gritado que hasta que no haya justicia no habrá paz. La polarización se da siempre en dos direcciones, y aunque la amenaza de la extrema derecha no debe infravalorarse, lo que domina la escena es un giro a la izquierda profundo y una correlación de fuerzas enormemente favorable para la clase trabajadora y la juventud.

**La experiencia del movimiento:
un factor decisivo**

No se pueden entender acontecimientos de estas dimensiones sin tener en cuenta el camino que la clase trabajadora y la juventud han recorrido tras el estallido de la crisis en 2008. Desde Occupy Wall Street y el nacimiento de Black Lives Matter, las históricas marchas de mujeres contra Trump, el movimiento de apoyo a Bernie Sanders, pasando por la oleada de huelgas de los profesores, la de la General Motors o la explosión de solidaridad con los inmigrantes encarcelados en centros de internamiento, la sociedad norteamericana ha sido golpeada por la lucha de clases.

Todos estos movimientos se han abierto paso a codazos, impulsados por activistas y organizaciones de la izquierda militante, sobrepasando las estructuras de los sindicatos tradicionales y del Partido Demócrata. Se han construido desde abajo y han tenido a la juventud en su vanguardia. Se han reclamado “socialistas”, han confrontado con el 1% de multimillonarios y han pedido sanidad y educación públicas y universales, han peleado por el salario mínimo de 15\$ la hora y lo han logrado en muchas ciudades, y han acumulado victorias también en el frente electoral con la elección de concejales de la izquierda como en Seattle. To-

**IZQUIERDA
REVOLUCIONARIA**

Afiliate a IZQUIERDA REVOLUCIONARIA y construye con nosotros las fuerzas del marxismo internacional

ANDALUCÍA: Cádiz 682 276 436 · Córdoba 619 033 460 · Granada 616 893 592 · Huelva 695 618 094 · Málaga 611 477 757 · Sevilla 600 700 593 · ARAGÓN: Zaragoza 640 702 406 · ASTURIAS: 686 680 720 · CASTILLA-LA MANCHA: Guadalajara 949 201 025 · Puertollano 650 837 265 · Toledo 699 956 847 · CASTILLA Y LEÓN: Salamanca 653 699 755 · CATALUNYA: Barcelona 933 248 325 · Tarragona 660 721 075 · EUSKAL HERRIA: Araba 625 707 798 · Bizkaia 664 251 844 · Gipuzkoa 685 708 281 · Nafarroa 635 919 738 · EXTREMADURA: 638 771 083 · GALIZA: A Coruña 678 420 888 · Compostela 637 809 184 · Ferrol 626 746 950 · Ourense 604 024 366 · Vigo 679 500 266 · MADRID: 914 280 397 · PAÍS VALENCIA: 685 098 482

www.izquierdarevolucionaria.net • contacto@izquierdarevolucionaria.net • [f](https://www.facebook.com/izquierdarevolucionaria) [ig](https://www.instagram.com/izquierdarevolucionaria) [t](https://twitter.com/izquierdarevolucionaria) @IzquierdaRevol

El levantamiento contra el racismo coloca al Gobierno Trump contra las cuerdas



do eso es lo que se ha expresado en este estallido, pero sus conclusiones siguen avanzando a toda velocidad.

Si algo ha distinguido todas estas luchas es que han tenido que sortear muchas barreras y dificultades. La última y más notable, la claudicación de Bernie Sanders ante el *establishment* del Partido Demócrata, y que a pesar de provocar un sentimiento de decepción entre muchos de sus seguidores no ha podido frenar el actual proceso. Una lección también para todos aquellos observadores superficiales que ven la política, y la lucha de clases, con los anteojos estrechos de la contienda electoral burguesa.

Por supuesto, el Partido Demócrata ya está moviendo ficha para tratar de contener esta situación y llevarla a dique seco. Después de que varios gobernadores demócratas aprobaran toques de queda en muchas ciudades, la dirección del partido maniobra ahora consciente de que aparecer enfrentados a esta lucha es la peor estrategia posible. Las declaraciones y gestos bien estudiados de Biden o Pelosi buscan rentabilizar la protesta y, sobre todo, retomar el control de la calle en su beneficio electoral. Lamentablemente, otras personalidades supuestamente “a la izquierda” dentro de sus filas, como Ocasio-Cortez, no hacen otra cosa que servir de comparsa en este teatro.

Obviamente, la lucha de masas tendrá su efecto favorable para los demócratas, pero no por confianza ni mucho menos entusiasmo, sino por un rechazo frontal a Trump y sus políticas criminales.

La situación está ahora mismo fuera de control, también para ese resorte de seguridad de la burguesía norteamericana llamado Partido Demócrata. Sus maniobras ya no son suficientes. Con Obama en la Casa Blanca, hizo bandera de “una reforma de la policía” para acabar con el racismo y la brutalidad policial. Pero toda su legislación fue un fraude que ha permitido que el racismo siga caminando a sus anchas en todas las instituciones del Estado capitalista. Fue precisamente la administración Obama, tan querida por todos los socialdemócratas del mundo, la que incrementó a niveles sin precedentes las deportaciones y detenciones de inmigrantes y personas negras.

Las masas han aprendido mucho. Su vanguardia ha luchado por levantar su propia alternativa en torno a Sanders y ha sido abandonada con el mensaje de que no es el momento de “jugar a la revolu-

ción” sino de ser “responsables”. Pues los mismos que llenaban los actos de Sanders, y muchos otros más, están demostrando que su lucha no es ningún juego y sus vidas tampoco. Lo verdaderamente importante de Sanders no era él en sí mismo sino lo que reflejaba.

En las últimas protestas de Minneapolis el alcalde demócrata de la ciudad fue abucheado y expulsado de la misma. Este hecho simboliza y demuestra las lecciones aprendidas; también las dificultades de los demócratas por hacerse con el control. El movimiento tiene fuerza de sobra para echar a Trump antes de los comicios de noviembre, eso es innegable. En todo caso hay que subrayar que una victoria demócrata no solucionará los acuciantes problemas de los millones que hoy protagonizan este levantamiento social.

Por un partido de los trabajadores y la juventud para luchar por el socialismo

Una de las consignas que más fuerza ha ganado en el movimiento es “Defund the police”, dismantlar la policía (retirarle la financiación). La presión ha sido tan fuerte, que los concejales de Minneapolis aprobaron el desmantelamiento de la policía de la ciudad y las autoridades de Los Ángeles y Nueva York también anunciaban nuevas normas para sus cuerpos de policía y un importante recorte presupuestario.

Tanto la policía, como el ejército, la justicia o el Congreso forman parte de un aparato estatal que sirve a los intereses de una clase social. La burguesía norteamericana, presionada por la lucha de masas, puede proclamar su devoción por la vida de la población negra y prometer reformas, pero el carácter racista y clasista de la policía permanecerá mientras el sistema capitalista no sea derrocado.

La idea de recortar los fondos a la policía y utilizar esos recursos en organis-

mos comunitarios, con un enfoque social que sirva para combatir la pobreza, la drogadicción, la violencia machista... se abre paso con mucha fuerza, pero hay que reconocer claramente que nada de esto ocurrirá mientras las palancas del poder sigan firmemente en manos de la clase dominante.

Estas ideas encierran una aspiración indudablemente progresista. Refleja que el papel del aparato del Estado ha quedado al desnudo ante los ojos de cientos de miles. Pero de lo que se trata es de ir a la esencia del problema: el sistema capitalista norteamericano y cómo derrocarlo para establecer una sociedad libre de cualquier opresión de clase, racial o de género.

Lejos de retroceder o desinflarse, el movimiento ha ido creciendo en fuerza, en confianza y en extensión. Las muestras de apoyo de colectivos como los conductores de autobuses negándose a transportar a los detenidos no han sido las únicas. Los estibadores han convocado paros de solidaridad en todos los puertos de EEUU contra la violencia policial. Organizaciones como la International Longshoremen's Association (ILA) y la United States Maritime Alliance (USMX), que agrupan a decenas de miles de trabajadores portuarios, suscribieron el llamamiento. También los trabajadores de supermercados y de correos en Minneapolis han secundado acciones similares. Si bien son paros simbólicos, constituyen una muestra de una solidaridad de clase que se extiende y de la enorme presión que existe sobre las direcciones sindicales.

Las movilizaciones no pueden mantenerse indefinidamente al mismo nivel y la burguesía declarará su ferviente disposición a llevar a cabo reformas cosméticas

para calmar los ánimos. Pero la catástrofe económica que se cierne sobre la clase obrera norteamericana avivará este fuego y endurecerá más el enfrentamiento.

El movimiento de masas encontrará nuevos cauces, pero debe conquistar claridad política. No basta con la espontaneidad, hace falta construir un partido de los trabajadores y la juventud con un programa socialista coherente, con métodos revolucionarios y que se base en la fuerza del movimiento obrero. Que abogue por la depuración completa de la policía de elementos reaccionarios y racistas, que deben ser expulsados y castigados ejemplarmente. Los departamentos de policía deben ser puestos bajo el control de las comunidades vecinales y las organizaciones de la clase obrera, empezando por los sindicatos combativos, los colectivos sociales, como Black Lives Matter y muchos otros, que están en primera línea del combate por los derechos democráticos y contra el racismo.

Pero estas medidas no agotan la cuestión. Para combatir el racismo hay que luchar contra su causa: el sistema capitalista. Es necesario dirigir toda la fuerza del movimiento para conquistar reivindicaciones que protejan las condiciones de vida de la población: el aumento de los salarios a 15 dólares la hora; la implantación inmediata de la sanidad y la educación públicas, gratuitas, universales y de calidad; la reforma integral de los barrios pobres, dotándoles de viviendas públicas, dignas y asequibles, y de los equipamientos sociales y culturales necesarios; un transporte público, ecológico, gratuito y de calidad; la aprobación de un subsidio de desempleo federal de 4.000 dólares al mes hasta encontrar empleo... Un programa socialista que implique elevar el horizonte político del movimiento con un programa revolucionario sólido y consecuente.

Necesitamos un partido de los trabajadores que no adopte ideas ni métodos sectarios, que trabaje con audacia en los movimientos sociales, en los grandes sindicatos defendiendo una política socialista genuina, que explique la necesidad de nacionalizar la banca y los grandes monopolios y planificar democráticamente la economía para rescatar a la gente y no a la plutocracia. Construir esta alternativa revolucionaria es la tarea central ahora mismo. Y desde hace muchas décadas no han existido condiciones más favorables para hacerlo.





Líbano

Las movilizaciones resurgen frente al colapso económico



Miguel Ángel Domingo
Izquierda Revolucionaria
Comisión Ejecutiva

La llegada de la pandemia ha asestado un golpe devastador a una economía ya en una profunda crisis. El confinamiento consiguió lo que cinco meses de maniobras de la oligarquía libanesa no habían logrado: vaciar las calles e imponer un parón al movimiento revolucionario que estalló el pasado 17 de octubre.

Un colapso económico sin precedentes

El levantamiento social en Líbano siguió el ejemplo del iraquí y de los movimientos de masas de Sudán y Argelia, que meses antes habían derribado a sus respectivos dictadores. Las masas ligaron correctamente la situación de la economía con el corrupto régimen sectario, producto del imperialismo francés y las diferentes alas de la oligarquía libanesa.

La actuación de ese Estado corrupto ante la pandemia ha sido otra prueba de su incapacidad para solucionar ningún problema de la población y de su capacidad para seguir robando y parasitando utilizando el veneno sectario. El Gobierno decretó el confinamiento el 15 de marzo y prometió una serie de ayudas, vitales en un país con unos servicios sociales colapsados y una sanidad en su mayoría privada. Ninguna de estas ayudas se ha llegado a poner en marcha.

El ejemplo más descarnado de lo que enfrenta la población trabajadora es el pavoroso desplome de la moneda. Aunque el Banco Central mantiene un cambio de 1.507 libras por dólar, en la calle alcanzó las 2.500 libras por dólar en enero y el 30 de junio las 9.000. Y nada indica que esta tendencia vaya a invertirse.

Del corralito se ha pasado a no poder retirar dólares de los bancos. Mientras la población apenas tiene acceso a unos ahorros que menguan a velocidad de vértigo, solo entre enero y febrero salieron de los bancos libaneses más de 5.000 millones de dólares, la gran mayoría hacia cuentas en el extranjero.

La inflación se ha disparado. Algunos informes la cifran en un 55%, otros la elevan en algunos productos básicos hasta el 90%. Quizá el dato más gráfico sea que los supermercados han dejado de marcar el precio en sus productos. La escasez se está generalizando, el 27 de junio alcanzó a la fabricación y distribución del pan, al faltar trigo por el colapso de la moneda. Según el Banco Mundial, el 60% de la población ha caído bajo el umbral de la pobreza.

Líbano arrastra una de las mayores deudas externas del mundo: unos 82.000 millones de dólares, un 170% de su PIB. En marzo se produjo el primer impago de deuda de su historia. El Gobierno pidió la intervención del FMI, a quien solicitó inyectar 10.000 millones de dólares y que se liberen los 11.000 millones acordados en la conferencia Cedre de 2018. Obviamente, tanto el FMI como los firmantes de Cedre exigirán las condiciones de aquella conferencia: reducción del déficit, reestructuración bancaria, privatizaciones, etc.; las medidas que iba a tomar el entonces primer ministro Hariri en octubre pasado y que provocaron el levantamiento social que acabó con su Gobierno.

La respuesta de las masas

El 21 de abril el grito de *Zaura!* (revolución) volvió a las calles en una caravana de coches en Beirut. Aunque no tuvo la dimensión de meses anteriores, mar-

caba de nuevo el camino de la movilización. Así, la noche del 27 de abril se produjeron manifestaciones contra el hambre y la congelación de cuentas bancarias. Partiendo de la combativa ciudad de Trípoli se extendieron a Beirut y al resto del país. Esta jornada fue bautizada como “noche de los *molotovs*”, por las decenas de oficinas bancarias atacadas con bombas incendiarias.

El Gobierno fue mucho más contundente en la represión: desplegó el ejército y cargó duramente contra las protestas y los bloqueos, utilizando fuego real y asesinando a un manifestante en Trípoli. Esto ha sido un punto de inflexión para sectores del movimiento que veían en el ejército un cierto papel de “símbolo nacional” no sectario. Ahora se ha revelado como lo que es: un firme defensor de la oligarquía y los bancos.

Aun sin una estrategia clara, las manifestaciones, cortes de carretera y bloqueos se han mantenido, impulsados desde abajo por la ira y por el hambre.

Maniobras sectarias

En las últimas semanas el primer ministro Hassan Diab y los partidos que le respaldan (Hezbollah, Amal y el MPL cristiano maronita de Michel Aoun) han señalado al gobernador del Banco Central libanés, Riad Salamé, como responsable de la situación actual. Esta disputa esconde los choques entre sectores de la oligarquía a diferentes niveles. Por un lado, entre el bloque del Gobierno y Salamé para ver quién carga con la responsabilidad de la crisis ante la población y, por el otro, entre el propio Diab y Hariri, que no renuncia a volver al cargo. En cualquier caso, no son más que intentos de echar arena a los ojos del movimiento, y ninguno de ellos va a significar una

solución para las necesidades cada vez más urgentes de las masas.

Hezbollah es la fuerza más poderosa de este Gobierno y vuelve a demostrar que no tiene un ápice de progresista. El presupuesto para 2020 es el del anterior Gobierno, que contempla, por ejemplo, un recorte del 7% en sanidad, sin que eso se haya modificado por la pandemia. A pesar de su retórica “antimperialista”, Hezbollah lleva participando en el Gobierno del Líbano desde 2006. Forma parte de los responsables del saqueo de la riqueza del país y ahora está dispuesto a negociar con el FMI ataques draconianos a las condiciones de vida de las masas a cambio de salvar el capitalismo libanés.

El 6 de junio se convocó una manifestación a la que también llamó a participar el bloque chií Hezbollah-Amal. Esa manifestación terminó con ataques de sus partidarios a manifestantes que pedían mantener las movilizaciones en la línea no sectaria de meses anteriores y el desarme de Hezbollah.

Sin embargo, la noche del 11 de junio, después de que la libra libanesa perdiera un 25% de su valor en dos días, manifestaciones espontáneas se extendieron por todo Líbano. En Beirut, simpatizantes de Hezbollah-Amal se unieron a la manifestación, durante la que se quemaron varios bancos y se produjeron enfrentamientos con la policía y el ejército. En las manifestaciones se pedía el cese de Salamé, la dimisión del Gobierno y elecciones anticipadas y se coreaban consignas antisectarias.

Es evidente que estas manifestaciones, como ocurrió en los meses anteriores, tienen un efecto en la base social de Hezbollah, y es evidente que Hezbollah maniobrará para intentar descarrilarlas aun participando en ellas. Su éxito dependerá de la capacidad del movimiento de seguir manteniendo su carácter no sectario, algo que hasta ahora ha sido una de sus fortalezas.

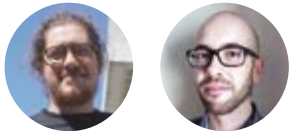
Una alternativa revolucionaria

Líbano se enfrenta a la barbarie, el caos económico es absoluto. No hay solución para las masas bajo el capitalismo. El único camino es llevar la revolución hasta el final. Y, como ha demostrado la experiencia, no es suficiente con la determinación del movimiento revolucionario, que ha sido total.

El movimiento se enfrenta a un enemigo que, a pesar de sus dificultades, tiene un programa y un aparato para defender sus privilegios. Es imprescindible oponerle una organización revolucionaria genuina, armada con el programa del marxismo internacionalista, que se base en las movilizaciones y organismos creados por el movimiento, que sean el embrión del poder obrero. Un programa para derrocar a la oligarquía, cancelando el pago de la deuda externa y nacionalizando la banca, tomando así el control de la riqueza del país, junto a un llamamiento revolucionario internacional.

La situación en Oriente Medio ya era de total inestabilidad. El crac en la economía va a tener consecuencias revolucionarias. La vuelta a las calles de las masas libanesas es un anticipo de lo que ocurrirá en un país tras otro, empezando por Iraq, donde también se han recuperado las movilizaciones. Una victoria revolucionaria en Líbano se extendería como la pólvora, a un nivel superior de lo que ocurrió en la primavera árabe en 2011 o en los estallidos revolucionarios en Argelia y Sudán en 2019.

Impulsar la lucha de masas y el frente único de la izquierda para tumbar el Gobierno Bolsonaro



Gonçalo Romeiro y Bruno Penha
Esquerda Revolucionária • Portugal

Con más de un millón de personas infectadas y cerca de 60.000 muertos, Brasil es actualmente el segundo país más afectado por la pandemia de Covid-19, solo por detrás de EEUU. La responsabilidad de Bolsonaro y su Gobierno en esta catástrofe es evidente: no han dejado de alentar un discurso negacionista rechazando tomar medidas efectivas contra la pandemia, y ha profundizado los ataques a la clase obrera y la población.

Guerra a los trabajadores y al pueblo

Mientras inyectaba 260.000 millones de reales a la banca privada, prometía a los trabajadores informales una limosna mensual de 200 reales, luego aumentada a unos ridículos 600 reales (105 euros). Ha permitido a las empresas reducir a la mitad los salarios e incluso suspenderlos por un periodo de hasta tres meses.

Después de años de dismantelar el Sistema Único de Salud (SUS), el Ejecutivo solo asignó 40.000 millones de reales a la salud durante la pandemia, dos tercios están sin utilizar. La tasa de ocupación en el SUS llega al 100% en muchos hospitales.

A la catástrofe sanitaria se suma la catástrofe económica. Aproximadamente la mitad de la mano de obra, 40 millones, sobrevive en empleos informales, sin ninguna posibilidad de dejar de trabajar. En el sector formal se han destruido 1,1 millones de empleos solo entre marzo y abril, y las solicitudes de prestaciones por desempleo ascienden a 3,3 millones de enero a mayo. Con el real devaluado casi en un 40% desde principios de año, la clase trabajadora ve cómo sus ingresos caen en picado.

Lucha de clases, crisis del Gobierno y divisiones de la burguesía

La pandemia ha acelerado la abrupta caída del apoyo social de Bolsonaro, incluso entre capas políticamente atrasadas de la población y sectores de las capas medias que le apoyaron electoralmente. Según una encuesta de *Datafolha*, un 17% de sus votantes se arrepienten, y otro 42% considera que su Gobierno es pésimo.

En paralelo, se ha incrementado la protesta social y la radicalización hacia la izquierda entre sectores de la población. En parte debido a la propia pandemia, ese malestar todavía no ha tenido una expresión mayor en la calle, pero las señales son evidentes. Uno de los últimos ejemplos ha sido la huelga contra la privatización de Petrobras este febrero, contra cientos de despido y por la defensa del convenio colectivo. La presión de más de 20.000 trabajadores obligó a extender la huelga 20 días. En plena pandemia, han sido las



capas más precarizadas, tradicionalmente ignoradas por el sindicalismo, como son los *motoboys* —repartidores de comida— quienes han mostrado el camino. Miles se declararon en huelga el 20 de mayo y preparan otra para el 1 de julio.

La onda expansiva de la rebelión estadounidense por el asesinato de George Floyd también ha llegado a Brasil, provocando una gran sacudida. La indignación generada por el crimen de varios adolescentes negros en mayo fortaleció el movimiento contra Bolsonaro. Así, las protestas han adquirido también un carácter antifascista, antirracista y contra las fuerzas de represión del Estado.

La crisis institucional que vive Brasil hay que situarla en este contexto. Se ha sucedido un torbellino de dimisiones que ha llevado a la salida del “superministro” Sergio Moro, de dos ministros de Sanidad y, recientemente, la del ministro de Educación. En guerra con los gobernadores de los principales estados, el presidente está cada vez más desautorizado por las principales instituciones del Estado e incluso por sus aliados, dentro y fuera del Ejecutivo. El apoyo al Gobierno ha caído al 30%. Envuelto en más escándalos de corrupción, con las manos manchadas de la sangre de Marielle, las manifestaciones de apoyo al clan Bolsonaro son más pequeñas y su Gobierno aparece más débil.

Su llegada a la presidencia lejos de abrir un periodo de estabilidad se está revelando como un elemento que agudiza la polarización social y política, sin resolver la crisis de fondo que sufre el capitalismo brasileño. Haga lo que haga la burguesía no tiene nada que ofrecer a las masas oprimidas. Ante una crisis capitalista mundial de dimensiones descomunales, la clase dominante brasileña acusa divisiones importantes en cuanto al camino a seguir.

Un sector percibe que cuanto más permanezca Bolsonaro en el Gobierno más riesgo existe de que estalle una rebelión social, que podría ir mucho más allá de exigir un cambio presidencial. Por eso están acelerando la puesta en marcha de una “alternativa democrática”, protagoni-

zada por partidos y líderes burgueses como Fernando Henrique Cardoso e incluso Michel Temer, expresidentes de Brasil y reconocidos reaccionarios neoliberales, con la cobertura de los dirigentes del PT, la CUT y lamentablemente del PSOL. Quieren propiciar un cambio por arriba, mediante un *impeachment*, para tratar que la situación no se descontrola por abajo.

Ante el intento de destitución por parte de otros sectores del aparato estatal (parlamento o poder judicial), las declaraciones y amenazas golpistas de Bolsonaro y sus huestes fascistas en el ejército (los militares ocupan 10 de los 22 ministerios), en la policía y entre los grupos paramilitares, han ido incrementándose. Pero un golpe militar en estos momentos podría desencadenar un movimiento revolucionario de masas e incendiar toda América Latina, no solo Brasil.

Por un frente único de la izquierda con un programa de independencia de clase. ¡Ninguna alianza con la mal llamada burguesía democrática!

Muy conscientes del enorme potencial de las protestas sociales crecientes, los dirigentes reformistas y conciliadores de los sindicales y de los principales partidos de la izquierda parlamentaria se niegan a propiciar una alternativa que rompa con la lógica del capitalismo y prepare el derrocamiento del Bolsonaro a través de la acción. En São Paulo fueron las aficiones de los cuatro grandes clubes de fútbol de la ciudad quienes organizaron las protestas del 31 de mayo, y organizaciones antifascistas y antirracistas han organizado manifestaciones con miles de participantes en las principales ciudades todos los domingos. Este hecho tiene una enorme importancia, revela un incipiente proceso de auto-organización de sectores de las masas.

En este escenario las direcciones del PT, la CUT, el MST y una amplia capa de líderes del PSOL, apelan a un Frente Amplio “antifascista” con estos sectores de la burguesía que ahora califican de “demócratas”, pero que ayer no tuvieron

el mínimo problema en abrir el camino al triunfo de Bolsonaro. Están dando cobertura a las maniobras de la burguesía en su búsqueda por neutralizar la lucha de clases en su propio beneficio. Lo que se necesita no es pactar con la burguesía para sostener el decrepito capitalismo brasileño, sino asegurar las condiciones de vida de la población, su salud, sus empleos y derechos, incluidos los derechos democráticos hoy amenazados, de la única manera que es posible: mediante la lucha por la transformación socialista de la sociedad.

Solo con un frente unido de las fuerzas que constituyen la izquierda sindical y política combativa, de todos los explotados y oprimidos, con un programa socialista, será posible enfrentar los planes reaccionarios de la burguesía. Este frente unido tiene que hacer un llamamiento a los activistas y militantes de la CUT y del PT para ganarlos a esta política, y romper así con el cáncer de la colaboración de clases.

Es urgente crear comités de lucha y de autodefensa contra la pandemia y las agresiones fascistas y policiales en cada centro de trabajo y comunidad. Hay que ocupar los inmuebles vacíos de los grandes fondos inmobiliarios para garantizar el confinamiento y el derecho a la vivienda al pueblo trabajador y pobre. Hay que asegurar el derecho al trabajo de los 40 millones de trabajadores informales y formales mediante una reducción drástica de la jornada laboral, sin reducción salarial y establecer un salario mínimo y subsidio de desempleo de 6.000 reales mensuales (1.000 euros). Hay que expropiar los latifundios y garantizar la tierra a quien la trabaja, poniendo fin a la destrucción del Amazonas y del medio ambiente.

Hay que preparar la huelga general para echar a Bolsonaro e imponer la paralización de todos los sectores no esenciales, y nacionalizar la banca y los sectores clave bajo control democrático de los trabajadores, para proporcionar los recursos necesarios a la sanidad, las pensiones y la educación públicas, el acceso a vivienda, salarios y condiciones de trabajo dignas para la inmensa mayoría.



¿Hacia dónde va el Gobierno PSOE-UP?

¡Ni paz social ni unidad nacional!

Responder con la lucha a la ofensiva de la patronal y la derecha

La pandemia de Covid-19 no ha hecho más que poner en evidencia la catástrofe social incubada durante años de recorres sangrantes, desempleo crónico, desahucios, precariedad y empobrecimiento, acelerando la crisis del capitalismo en el Estado español y en el resto del mundo.

La economía global se enfrenta a la peor recesión desde el crack de 1929, y sus efectos ya se están dejando sentir en todos los planos. En el Estado español la situación no puede ser más sombría. Las previsiones de diferentes instituciones oscilan entre una caída del PIB del 12% y el 18% para este año. En su último estudio, el FMI dibuja un retroceso del 12,8% —el mayor desde la Guerra Civil— y un incremento exponencial del déficit público que pasaría de un 2,8% en 2019 a un 13,9% en este ejercicio. La deuda glo-

bal española se situaría en el 124% del PIB, cuando a finales de 2019 cerró en el 95,5%. A nadie se le escapa que son datos escalofriantes y que se traducirán en un gran sufrimiento para los trabajadores y la juventud.

Los cálculos más optimistas señalan un incremento del desempleo del 14% al comienzo de la pandemia al 20 o el 25% para finales de año. Otras afirman que se superará el 30% a principios de 2021. Intermón Oxfam estima que en el mejor de los casos 700.000 personas pasarán a engrosar las filas de la pobreza, que podría afectar de lleno al 26% de la población al acabar 2020. Mientras esta realidad se presenta como inevitable, las 23 mayores fortunas del Estado español han incrementado su riqueza en 19.200 millones de euros entre el 18 de marzo

y el 4 de junio, es decir un 16% más, y seis veces el presupuesto destinado por el Gobierno al Ingreso Mínimo Vital. Resulta obvio que no estamos todos en el mismo barco.

¿A quién beneficia la unidad con la patronal y la derecha?

Entre capas de activistas y militantes de la izquierda se está produciendo un debate que se hará más intenso a tenor de estos datos y de los movimientos que el Gobierno está realizando en las últimas semanas para lograr los apoyos de Ciudadanos y del PP para los llamados pactos de reconstrucción. ¿Es cierto, como afirma el PSOE y los dirigentes de Unidas Podemos, que la gestión de esta crisis está siendo cualitativamente distinta

a la de 2008? ¿Se está produciendo una verdadera salida social?

Los hechos ponen en evidencia el discurso oficial del Gobierno y desmienten mucha de su propaganda. No es algo para celebrar ni mucho menos. Cualquiera puede ver la ofensiva de la derecha en estos meses, y la pesadilla que supondría su vuelta a La Moncloa. Por eso rechazamos cualquier ejercicio gratuito de sectarismo, pero también ponemos distancia con el seguidismo que se niega a una profunda reflexión de los acontecimientos y sus consecuencias políticas. Si queremos construir una izquierda a la altura de las circunstancias históricas que vivimos, lo peor es negar la realidad y agarrarse a un discurso que todo lo justifica y que equipara la crítica seria y legítima, desde un punto de vista de clase, a una “provocación” que supuestamente hace el juego a la derecha. Ya tuvimos suficiente de eso bajo el *felipismo*.

No es ninguna casualidad que el giro cada vez más agudo del Gobierno en su búsqueda de pactos con la derecha coincida con la Cumbre de la CEOE, clausurada por Felipe VI. La reunión ha mandado mensajes muy nítidos: la necesidad del “máximo consenso político” para salir de la crisis y una fuerte presión al PP para que abandone su oposición sin cuartel al Gobierno y reme en la dirección que el gran capital marca en este momento. ¿Y qué es lo que la oligarquía empresarial y financiera exige?

Mantener las contrarreformas estructurales adoptadas durante la crisis anterior por el PP, y especialmente la reforma laboral; ni subida de impuestos, ni nuevos impuestos; asegurar que continúe el chorro de dinero público para las grandes empresas; flexibilización de los



¿Hacia dónde va el Gobierno PSOE-UP?

ERTE y del mercado laboral garantizando la precariedad masiva, el descuelgue de convenios, la movilidad funcional o geográfica o la distribución irregular de la jornada; o potenciar la “colaboración público-privada” para mejorar la eficiencia y calidad en la “sanidad, la educación y las infraestructuras”. Como siempre, se trata de garantizar los beneficios empresariales —que en 2018 registraron el récord de más de 500.000 millones de euros— a costa de la miseria creciente, la sobreexplotación de la clase trabajadora y las privatizaciones de los servicios públicos esenciales.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en un ejercicio extremo de cinismo, se permitió señalar que “las crisis no se financian con impuestos, porque no hay capacidad económica que gravar, se financian con deuda”. Los campeones de la austeridad y el equilibrio presupuestario —que lo son también en fraude fiscal— exigen que el Estado se endeude, como ya ocurrió en la crisis anterior, para mantener e incrementar sus dividendos. Por supuesto, la factura de esta deuda la pagará la clase trabajadora en forma de recortes sociales, hundimiento de los salarios y empeoramiento de las condiciones laborales.

El Gobierno PSOE-UP puede disimular, pero es imposible ocultar que ha reaccionado muy favorablemente a estas exigencias. En abril aprobó un plan de rescate de las grandes empresas y la banca mayor que en 2008: 100.000 millones a su disposición con el aval del Estado. Una cantidad insuficiente para Ana Patricia Botín, que se quejaba de que “mientras que el programa de avales a través del ICO equivale al 10% del PIB, el equiparable en Alemania supone el 30% del PIB alemán”. Botín es coherente cuando razona así. ¿Por qué no pedir más? En este ejemplo se aprecia una ley importante de la lucha de clases: la debilidad siempre invita a la agresión. Y este Gobierno se muestra débil y sumiso con el gran poder económico porque un componente esencial del mismo, el PSOE, siempre ha trabajado por sus intereses.

El Estado capitalista no es neutral, es un instrumento esencial para proteger los negocios de la burguesía. Las recetas que se están adoptando no difieren, en lo fundamental, de las que se tomaron al calor de la Gran Recesión de 2008. Ahora toca que el Estado vuelva a pagar, o lo que es lo mismo, socializar las pérdidas empresariales, pero como ya ha señalado la CEOE será necesario volver “a una senda de estabilidad a medio y largo plazo”, es decir, a las políticas de austeridad. Es evidente que alguien tendrá que pagar esta abultada factura. El Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya están abogando por un tajo de 60.000 millones al gasto público en 10 años (6.000 por año), junto a nuevas “reformas estructurales” como la del sistema de pensiones —para recortarlas y atrasar la edad de jubilación— o incrementar impuestos como el IVA reducido y superreducido que afecta a productos básicos y pagamos los trabajadores.

¿Quién manda en el Gobierno?

Otro hecho inapelable, que demuestra qué intereses orientan las decisiones de fondo del Gobierno de coalición, es el pa-

pel que juega la ministra de Economía, Nadia Calviño.

Esta representante directa del Ibex-35 ya demostró cuál es su función en el Consejo de Ministros cuando dio un golpe sobre la mesa invalidando fulminantemente el acuerdo con EH Bildu para derogar íntegramente la reforma laboral. Un golpe que asestó públicamente en una reunión con grandes empresarios, ridiculizando y ninguneando a Pablo Iglesias y a los ministros de UP.

Nadia Calviño no está en esa posición por casualidad. Es la garantía para la burguesía española y europea de que las reglas del juego que marca el sistema se cumplen. Y el problema es que los ministros de Unidas Podemos, que llegaron a este Gobierno con el argumento de que su presencia empujaría al PSOE hacia la izquierda, están mostrando con su proceder que es exactamente lo contra-

que les dio credibilidad y un apoyo de masas —la lucha contra el régimen del 78— en aras de sostener al PSOE y una política de colaboración de clases con la burguesía que, de mantenerse en el tiempo, conducirá a un desastre total. El saldo de renunciar a la movilización social y la lucha de clases es también la pérdida de influencia electoral a favor de la socialdemocracia tradicional. Algo que se va a comprobar en las elecciones vascas y gallegas con un desplome más que probable del voto a UP.

¿Quién utiliza a quién? Unidas Podemos debe rectificar urgentemente

Los llamados Pactos de Reconstrucción Social y Económica apuntan en esa misma dirección. La ambigüedad del documento del Gobierno aprobado en la Co-

ta, ¿ha cambiado usted de opinión desde que es ministro?”. Garzón respondió así: “Cuando hablo con las empresas tecnológicas y grandes empresas veo niveles de acuerdo muy superiores a los que veo en el Parlamento”. No se puede estar más alejado del marxismo y de una política de independencia de clase. Es realmente asombroso.

La clase capitalista ha demostrado siempre una gran flexibilidad y pragmatismo, colaborando con Gobiernos de distinto signo siempre que en lo fundamental garanticen sus intereses. Por eso hay que entender que el nivel de acuerdo con la CEOE y el Ibex-35 no es el fruto de la habilidad de los ministros del PSOE o UP para convencerlos, sino de las cesiones constantes ante sus exigencias.

Y las presiones de las últimas semanas han tenido efectos inmediatos como queda reflejado tanto en las propuestas del



rio. Pablo Iglesias y Garzón, a cambio de algunos recursos que presentan como un “escudo social”, aceptan las políticas derechistas que el PSOE de Sánchez les impone. La retirada ignominiosa del impuesto a las grandes fortunas en el proyecto de reconstrucción presentado al parlamento es otro ejemplo más.

Pero lo más lamentable ha sido la actitud de UP ante la candidatura de Calviño para presidir el Eurogrupo. La noticia ha sido celebrada y apoyada por la CEOE, Ciudadanos, el PP, incluso Vox. Calviño también ha recibido la felicitación entusiasta de Ana Patricia Botín y de muchos otros grandes empresarios españoles, e incluso el apoyo de Merkel. Por eso sorprende que un ministro que se proclama comunista como Alberto Garzón, reproduzca estos mismos argumentos, señalando que esto permitirá cambiar las políticas europeas.

El nombramiento de Nadia Calviño no solo no cambiará la política de la Unión Europea, sino que garantizará que el gran capital tenga un pie aún más firme en el Gobierno PSOE-UP.

Los dirigentes de UP siguen profundizando en su renuncia a un programa

misión busca, como han reconocido desde La Moncloa, el apoyo del partido de Inés Arrimadas y el de Pablo Casado. Es la manera de lograr que los recursos de Europa lleguen a sus destinatarios reales y blindar los recortes y contrarreformas que la UE exige a sus Estados miembros.

La aproximación a Ciudadanos, tanto del PSOE como de dirigentes destacados de UP abiertos ahora a negociar con esa formación los presupuestos, o el giro que se está operando en el PP, que votó a favor del decreto de “nueva normalidad”, ponen aún más en evidencia la estrategia del gran capital. Como ocurrió con los Pactos de La Moncloa en 1977, se trata de garantizar una salida capitalista de la crisis, manteniendo la paz social y a la clase obrera atada de pies y manos en un momento de catástrofe económica. Para lograr este resultado hay que comprometer a los dirigentes reformistas de la izquierda parlamentaria y sindical.

En una entrevista publicada el sábado 13 de junio en el diario *El Mundo* le preguntaban a Alberto Garzón: “Eso que dice usted de que son las empresas y no el Gobierno los que cambian el modelo productivo no suena muy comunis-

Gobierno como en sus silencios clamorosos para ese Pacto de Reconstrucción:

1) Se ha abandonado la derogación integral de la reforma laboral, el documento del PSOE-UP por la reconstrucción ni siquiera lo cita. Así lo confirmaban las *kellys* tras una reunión con las ministras de Igualdad, Irene Montero, y de Trabajo, Yolanda Díaz: “Nos dicen que es muy complicado derogar la reforma laboral, tocar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores, pero ¿sabes qué es complicado? No poder pagar la hipoteca, no poder ni pagar el abono transporte, hacer 400 habitaciones en un mes, no cotizar todas las horas que trabajas. Eso, es complicado” (elplural.com, 18/06/2020). Ese artículo 42.1 legaliza la subcontratación, el puro prestamismo laboral responsable del proceso de precarización vivido durante la última década.

2) La política generalizada de ERTE, acordada con la patronal, CCOO y UGT, se ha convertido en una herramienta de reconversión laboral en manos de las empresas. El Estado asume los salarios y cotizaciones, las y los trabajadores ven reducidos sus salarios hasta en un 30% y las grandes empresas no ponen un duro

¿Hacia dónde va el Gobierno PSOE-UP?



de los beneficios multimillonarios acumulados durante años. Esta política, que se ha prorrogado hasta septiembre, amenaza con perpetuarse en línea con lo que reclama la patronal: "...el diálogo social estudiará un marco adecuado de regulación y cofinanciación para que los ERTE sean un instrumento de flexibilidad interna de las empresas (...) se analizará también que las empresas que puedan recuperar parcialmente su actividad procedan a la incorporación de personas trabajadoras, afectadas por ERTE, primando los ajustes en términos de reducción de jornada..." (Documento del PSOE-UP).

3) Se ha impulsado el Ingreso Mínimo Vital con un presupuesto de 3.000 millones de euros anuales, lo que contrasta no ya con las ayudas al sector financiero y empresarial (100.000 millones), sino con las aprobadas a la industria del automóvil (casi 3.750 millones) o con las del sector turístico (4.262 millones). Al tiempo se ha abandonado la propuesta de un impuesto a las grandes fortunas o a la banca, tal y como exigieron Ana Botín (Santander), Carlos Torres (BBVA), Jordi Gual (CaixaBank) y José Ignacio Goirigolzarri (Bankia) en la cumbre de la CEOE.

4) En la sanidad, el Gobierno ha aprobado una partida de 9.000 millones de euros para compensar la crisis sanitaria. Dicha partida tendrá que afrontar gran parte de los gastos que ya se han realizado, incluyendo el pago a la sanidad privada, quedando en manos de las Comunidades Autónomas la gestión. No se establecen criterios que primen la defensa de la sanidad pública ni que impidan utilizar estos recursos para hacer negocios en beneficio de la privada.

El documento del PSOE-UP no menciona la recuperación de los servicios privatizados o a la derogación de la Ley 15/1997 que abrió la sanidad pública a las multinacionales del sector. Y carece de cifras concretas en cuanto a contrataciones de sanitarios, mejoras en sus condiciones laborales e inversiones concretas en recursos. Por otro lado, después de reconocer que solo el 29% de las residencias de mayores son públicas, y de

ellas solo el 25% de gestión directa, se omite cualquier referencia a la necesidad de recuperar este sector como un servicio 100% público.

5) Lo mismo podemos decir sobre la educación. Ninguna mención a un plan de rescate de la enseñanza pública para garantizar la gratuidad de la enseñanza para las familias trabajadoras, ni a la contratación de miles de docentes para la puesta en marcha del próximo curso en las condiciones necesarias de seguridad y calidad. Tampoco hay referencia alguna a la supresión de los conciertos educativos y la financiación de la privada.

6) Respecto a la vivienda la propia PAH ha sido muy crítica con Pablo Iglesias y el Gobierno, planteando la necesidad de que la moratoria se aplique en todos los casos en que no exista alternativa habitacional. La organización explica que con la reanudación de los plazos procesales están volviendo los desahucios, quedando muchas familias fuera de las medidas del Gobierno, al ser muy limitada la definición de vulnerabilidad de cara a acogerse a las mismas. A esto se suma que las ayudas al alquiler o para el pago de hipotecas suponen préstamos del Estado que hay que devolver por los inquilinos y propietarios de una vivienda, para garantizar el negocio de la banca y los especuladores. Ningún plan específico para establecer el acceso a la vivienda pública, con alquileres sociales asequibles, ni de contención de la especulación inmobiliaria.

7) En cuanto a las pensiones, en el documento se insiste en la retórica de "sostenibilidad" y "suficiencia" del sis-

tema público, términos siempre utilizados para justificar ajustes. El propio ministro de la Seguridad Social ya ha señalado la necesidad de aumentar la edad real de jubilación y el periodo de cotización de cara a computar la pensión, restringiendo la jubilación anticipada, lo que implicaría más recortes para los futuros pensionistas.

8) Y en el terreno de los derechos democráticos se mantiene íntegra la Ley Mordaza del PP, un brutal atentado contra el derecho a manifestación, organización y expresión que se aprobó con el único objetivo de castigar a los trabajadores y organizaciones que luchan, a los movimientos sociales y a la juventud. La derogación de esa ley era una de las reivindicaciones más sentidas por la base social de la izquierda, y es vergonzoso que todo ese arsenal represivo, hecho a medida de los sectores más reaccionarios de la sociedad y del aparato del Estado, siga intacto con un Gobierno que se comprometió a ponerle fin. No solo no lo han hecho, sino que ahora está siendo utilizada como nunca: en menos de dos meses, desde la entrada en vigor del estado de alarma hasta el 1 de junio, las fuerzas de seguridad han batido todas las marcas con la imposición de 1.089.917 multas, un 42% más que entre 2015 y 2018.

Nos encontramos ante las viejas recetas de siempre. El documento del Gobierno PSOE-UP aprobado en la Comisión de Reconstrucción está lleno de abstracciones y gravísimos olvidos, con el objetivo de ganar el apoyo de la derecha.

Pero, ¿a qué precio? El Gobierno de Tsipras en Grecia se plegó a la troika. Hizo el trabajo sucio y finalmente perdió las elecciones ante la derecha. Si el Gobierno de coalición no da un giro de 180 grados en su política, esta perspectiva se puede repetir aquí.

Para enfrentar la catástrofe social necesitamos una alternativa de clase y revolucionaria

La derrota de la derecha en las últimas dos elecciones y la formación del Gobierno de coalición PSOE-UP fue un golpe para la clase dominante, que buscaba un Gobierno estable y "responsable" sin la presencia de Unidas Podemos. Tras imponerse por la vía de los hechos una solución que no era del agrado de los capitalistas, y que también era un reflejo de una correlación de fuerzas favorable para romper con la lógica del sistema y la disposición de millones para sostener la movilización en las calles, la burguesía está activando todos sus recursos y medios para lograr sus objetivos estratégicos.

La pandemia ha acelerado la crisis capitalista y los planes para llevar adelante contrarreformas estructurales, más recortes y nuevas políticas de austeridad contra la clase obrera. Pensar que la salida a la crisis será distinta porque los empresarios han adquirido supuestamente conciencia de esta dramática situación es una utopía reaccionaria. ¡Es justo lo contrario! Aprovechando el desplome económico, la plutocracia financiera y los Gobiernos a su servicio estrujarán aún más a la clase trabajadora. Lo único que puede frenar esta dinámica es la lucha de clases, la organización y movilización masiva y consciente de la clase obrera y la juventud. Ese debería ser el objetivo de Unidas Podemos, y no la mera gestión de un sistema cuya lógica les obliga a ceder cada vez más en sus planteamientos y en sus objetivos.

Necesitamos prepararnos para el choque colosal que se avecina. El capitalismo en esta época de su decadencia senil muestra su auténtica cara. La degradación medioambiental, que mucho ha tenido que ver en esta pandemia, ha puesto también en evidencia que caminamos hacia un precipicio que amenaza a la humanidad. Plantear que no es el momento, que no hay fuerza o que, en última instancia, hay que convencer a nuestros opresores para que se sumen al cambio, no solo es utópico sino inútil y estúpido. Lo que necesitamos es levantar una alternativa para la transformación socialista de la sociedad que enfrente a los responsables de esta catástrofe. Y por eso se hace urgente construir una organización revolucionaria dispuesta a asumir esta tarea hasta sus últimas consecuencias.



¡Socialismo o barbarie!

Únete a

IZQUIERDA

REVOLUCIONARIA




www.izquierdarevolucionaria.net



Iker Otermin
Ezker Iraultzailea
Bilbo

El 23 de junio los votos del PSOE, PP y Vox tumbaron en el Congreso la propuesta de EH Bildu para realizar una comisión de investigación sobre la implicación de Felipe González en los GAL. Alegando que todo está juzgado y sentenciado, el PSOE continúa sin asumir la responsabilidad que tuvieron sus Gobiernos en el terrorismo de Estado.

Los máximos dirigentes de un partido que se reclama de izquierdas se implicaron en la organización y financiación de grupos parapoliciales de mercenarios en la “guerra sucia”, que realizaron más de treinta atentados con sesenta heridos o asesinados, al menos diez sin ningún tipo de relación con ETA. Junto a estos comandos, integrados por policías de extrema derecha, los Gobiernos del PSOE ampararon las torturas en los cuartelillos y aprobaron leyes de excepción que reprimieron duramente las libertades políticas. Las cloacas del Estado se fortalecieron gracias al famoso “señor X” que movía los hilos, presuntamente el expresidente González, y que además de no ser nunca juzgado aún sigue teniendo el carnet del partido y actuando como oráculo de la burguesía.

Es muy significativo que PSOE, PP y Vox se hayan puesto de acuerdo para no investigar la corrupción de Juan Carlos I y su implicación en el 23F, y lo vuelvan a hacer respecto a los GAL. El régimen del 78 acumula demasiados trapos sucios a sus espaldas que, tanto la derecha española como los dirigentes socialistas, consideran que lo mejor es ocultarlos. El aparato del Estado heredado del franquismo sigue funcionando a pleno rendimiento, y de él se espera que preste todavía muchos servicios en defensa de la oligarquía económica que tiene en sus manos el poder real.

Abandonando posiciones para hacer el juego al régimen

El 18 de junio Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, manifestó estar en contra de la comisión para investigar a Felipe González. Sus declaraciones diciendo que “todo el mundo sabe lo que pasó” y que esta cuestión podría “distraer” provocaron una enorme indignación entre la base social de la izquierda más comprometida y militante en Euskal Herria y en el resto del Estado. Entre la militancia de Podemos en Euskadi y Nafarroa se produjo un auténtico terremoto que se plasmó en la renuncia a la militancia de la anterior candidata a lehendakari Pili Zabala, hermana de Josean Zabala, que envió una dura carta a Pablo Iglesias mostrando su profundo rechazo a esa posición.

Solo 24 horas después, Echenique tuvo que rectificar y plantear que Unidas Podemos votaría a favor de la comisión. Sin embargo, mantenía el mismo argumento: es inoportuna para la unidad del Gobierno de coalición y con las elecciones vascas a las puertas.

Estas afirmaciones traspasan cualquier línea roja. Al zanjar la propuesta de esta comisión como una “maniobra” electoralista de la izquierda abertzale, cabe preguntarse en qué perjudicaría a UP que se juzgara a los responsables del terrorismo de Estado. ¿Acaso no aumentaría la autoridad de este Gobierno ante la clase trabajadora y la juventud si sentara en el banquillo a todos los responsa-

¿Combatir el régimen del 78 o encubrirlo?

Podemos y la comisión de investigación de los GAL



bles de los crímenes políticos desde los de la dictadura franquista hasta los que organizaron los GAL, incluido a Felipe González?

Lejos de pretender esconder los trapos sucios del pasado del PSOE, precisamente por compartir Gobierno, los dirigentes de Unidas Podemos deberían ser los primeros interesados en esclarecer y juzgar a todos los responsables de la “guerra sucia”.

Para mayor escarnio al portavoz de Podemos, el PP y Vox no han pestañado para garantizar junto al PSOE los votos necesarios para que no se investigue nada. Lo que beneficia a la derecha es la hipocresía de los dirigentes de la izquierda cuando tocan poder, y que estos se asimilen paso a paso a lo que decían combatir.

Podemos y las elecciones vascas

Esta deplorable actuación ha sido cogida al vuelo por el PNV, que con la hipocresía y el oportunismo que caracteriza a la derecha nacionalista vasca lo ha visto como una oportunidad para potenciar su “cara progre” en las elecciones vascas.

Gracias al titubeo constante del Gobierno de coalición, el PNV ha tomado la iniciativa para proponer reformar la Ley de Secretos Oficiales y así barnizar su demagogia de derecha progresista frente a Vox. Pero el pasado del PNV está marcado por el apoyo constante a los Gobiernos del PSOE y del PP en sus políticas represivas. En los años 80, los de la guerra sucia, ellos pusieron en marcha junto con el PSOE la política de dispersión de los presos vascos que sigue vigente.

Hay que recordar que si Podemos ganó las elecciones generales del 2016 en Euskadi y Catalunya fue porque además de un discurso a la izquierda defendía el reconocimiento al derecho a la autodeterminación. Retroceder en este programa, como ha quedado patente durante la lucha del pueblo catalán por la república en la que Podemos ha renunciado a participar, o como ahora en Euskal Herria oponiéndose a la huelga general del 30E y sosteniendo los presupuestos del PNV, solo fortalece al nacionalismo español y al régimen del 78, pero también al nacionalismo burgués vasco y catalán.

Combatir el régimen del 78 o legitimarlo

Efectivamente, todos sabemos lo que ha pasado y lo que sigue pasando: el doble rasero de esta justicia heredada directamente del franquismo, ofrece impunidad a los poderosos y encierra a los que se atreven a denunciar su injusticia.

A José Barrionuevo y Rafael Vera, condenados a 10 y 12 años de cárcel por organizar los GAL, el Gobierno de Aznar les ofreció el indulto a tan solo seis meses de haber sido juzgados y estuvieron en prisión tres. Los jóvenes de Altsasu Jokin, Adur y Oihan llevan en la cárcel más de 1.300 días por una pelea de bar con dos guardias civiles y sus parejas, y la lesión más grave fue un tobillo roto.

Los golpistas del 23F Armada y Tejero también fueron indultados por el Gobierno de Felipe González, y el propio juicio se encargó de no tocar la conocida implicación de Juan Carlos I. Sin em-

bargo, los diez presos políticos catalanes siguen en la cárcel por defender el legítimo derecho a decidir. De la misma forma se ofrece el indulto a la corrupción política, mientras se persigue y criminaliza a sindicalistas y activistas de la izquierda por luchar contra los desahucios o por los derechos de los trabajadores.

No son cosas del pasado. La represión y la corrupción del régimen del 78 están más vivas que nunca. Si Unidas Podemos pretende —como dice— avanzar mínimamente hacia la justicia social, debe luchar contra el régimen del 78 y todo lo que representa en vez de encadenarse a él. Debe exigir esclarecer y juzgar todos los crímenes de Estado, depurar este aparato estatal plagado de fascistas en sus cúpulas judiciales, policiales y militares.

La clase trabajadora y la juventud mantienen muy fresco en su memoria el estreno parlamentario de Pablo Iglesias cuando denunció a Felipe González por tener “las manos manchadas de cal”, en referencia al asesinato de Lasa y Zabala, torturados y enterrados en cal viva por la Guardia Civil. También recordamos los discursos que planteaban la prohibición de los desahucios, la nacionalización de empresas estratégicas, no pagar la deuda ilegítima a los bancos, y sobre todo los que denunciaban a la casta. Conectaban con el sentir de amplias capas de trabajadores y jóvenes hartos de la hipocresía de los políticos de este régimen podrido y enfangado en la corrupción.

No hay salidas intermedias. O se combate el régimen del 78 o se le protege con todas las consecuencias. Las palabras y los discursos no sirven si no se acompañan con los hechos.

12 de julio • Elecciones autonómicas gallegas

Derrotar a Feijóo es posible, con una política auténticamente de izquierdas



Javi Losada
Esquerda Revolucionaria
Galiza

Tres meses después de la convocatoria prevista para el pasado 5 de abril, suspendida por el coronavirus, todo apunta a que el PP conservará la mayoría absoluta por cuarta legislatura consecutiva el próximo 12 de julio.

Todas las encuestas, incluida la del CIS, dan al PP un mínimo de 39 escaños (uno más que la mayoría absoluta) mientras la izquierda en su conjunto sumaría un máximo de 36. Además, auguran un batacazo de Galicia en Común (la nueva marca de la coalición entre Podemos, Anova, las Mareas e IU), que pasaría de ser primera fuerza de la izquierda con 14 parlamentarios a última con un máximo de 6. El BNG subiría a la segunda posición con un mínimo de 12 representantes, duplicando lo que tenía hace cuatro años, y el PSOE rondaría los 16, de los 14 que tiene.

Feijóo, un neoliberal con piel de cordero

Estas cifras no se explican por la buena gestión del PP, que —como en el resto del Estado— ha ejecutado una política de recortes en el gasto social como el que más. Y es que por mucho que nos quieran vender a Feijóo como un “moderado”, la realidad es que representa a la perfección los valores reaccionarios del PP.

A los ya conocidos vínculos con el narcotráfico podemos agregar los casos de enchufismo de familiares y amigos en el sistema de salud público gallego. Tampoco lo salvan las grandes cifras económicas: en once años de Gobierno el paro no ha mejorado, la deuda pública se

ha disparado un 235% y el peso de los salarios en la riqueza (PIB) ha disminuido del 48% en 2009 al 42,4% en el tercer trimestre de 2019.

La industria se encuentra metida en una oleada de cierres y despidos brutal. A la falta de carga de trabajo en los astilleros de Vigo y Ferrol, hay que sumar el anuncio de cierre de la central térmica de As Pontes o de una de las dos plantas de Alcoa en San Cibrao. Por no mencionar las varias decenas de medianas empresas que han anunciado su cierre total o parcial.

Feijóo es un firme defensor de la privatización de los servicios públicos, al igual que Casado o Díaz Ayuso. Como denuncia la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, el PP se ha dedicado durante estos once años a “abrir espacios a las multinacionales tecnológicas y farmacéuticas, fondos de inversión y fondos buitre, que han visto en los presupuestos sanitarios y en la política neoliberal de Feijóo una gran oportunidad para hacer negocio”. Esto se ha traducido en un recorte de 2.200 millones de euros en inversiones, en la reducción de 900 camas y en un cociente de enfermeras/os y médicas/os por habitante que nos sitúan en la cola europea y española.

Como resultado, su gestión de la crisis provocada por la pandemia ha sido lamentable: más de 11.000 personas contagiadas y 619 muertes, de las cuales más de 270 se produjeron en residencias de mayores previamente privatizadas y en manos de gente muy próxima al PP de Feijóo. Además, durante la crisis —y con la excusa de reservar espacios para enfermos por coronavirus— se cerraron camas y plantas enteras de hospitales públicos, y esos pacientes fueron derivados

a hospitales privados, con el consiguiente negocio. Ahora, no solo no se han recuperado, si no que plantean cerrar más camas de cara al verano.

Galicia en Común pagará el precio de su acomodo al sistema

Todo eso no ha ocurrido ante la pasividad de la gente. Al contrario, esta legislatura ha sido una de las más conflictivas en años. Ha habido grandes manifestaciones contra este deterioro del sistema público de salud. Decenas de miles de personas se manifestaron contra el cierre del paritorio de Verín, la reducción de las Áreas Sanitarias de once a siete, o los recortes en la atención primaria. Esto, junto a movilización de los trabajadores de justicia, con una huelga de meses, o la escandalosa actuación de la Xunta ante los incendios, por inexistente, han contribuido como nunca a desmontar esa imagen de “eficiente gestor” de lo público.

También hemos visto la respuesta en las calles contra los efectos del paro y la desindustrialización: ejemplos como el de los trabajadores de los astilleros, de la central térmica de As Pontes, de Alu Ibérica (antes Alcoa) o de Ferroatlántica, a los que ahora se suman los de Alcoa en San Cibrao ponen de manifiesto la disposición a la lucha de la clase obrera gallega.

A diferencia del ambiente de entusiasmo que se respiraba en las últimas autonómicas, cuando En Marea irrumpió con enorme fuerza acompañada de un discurso de lucha y de ruptura contra el régimen del 78 y sus instituciones, estas elecciones vienen marcadas por el giro a la derecha operado en la nueva izquierda que vino a “asaltar los cielos”. Durante estos años En Marea (ahora Gali-

cia en Común) se ha mostrado como una herramienta incapaz de cambiar la realidad de la juventud y los trabajadores. Desaparecidos de las luchas y de la movilización en la calle, metidos en estériles batallas parlamentarias, negándose a aplicar medidas básicas como la remunicipalización de servicios en los ayuntamientos donde gobernaban (Compostela, A Coruña y Ferrol), y con el bochornoso espectáculo dado con su ruptura en dos en el parlamento gallego, el resultado es que, hoy en día, entre los sectores más golpeados por la crisis, GeC es vista cada vez más como una fuerza más del sistema.

Realmente, han acabado siendo una fotocopia de la vieja socialdemocracia y, como muchas veces ocurre, sobre todo en el terreno electoral, entre la copia y el original, el último tiene ventaja. Eso explica la posible recuperación por parte del PSOE y el BNG de parte del voto perdido hace cuatro años a favor de la marca de Podemos en Galicia.

GeC defraudó las enormes expectativas de cambio, alimentando así la desmovilización del voto de la izquierda. Esa es la principal baza con la que cuenta el PP para seguir en la Xunta.

Hay que construir una izquierda combativa

Por eso, es importante no confundir una probable victoria del PP con un supuesto giro a la derecha de la clase obrera y la juventud, o con su debilidad o pasividad.

Hay que decir con rotundidad que sí es posible echar al PP de la Xunta. Si los dirigentes de las formaciones de izquierda estuviesen al pie del cañón, por ejemplo, con los trabajadores de Alcoa, defendiendo su nacionalización bajo control obrero y sin indemnización (ya bastante dinero público se les ha regalado) e impulsado la extensión de la lucha al resto de Galicia y del estado. Si defendiesen la consigna “empresa cerrada, empresa ocupada”. Si más allá de hacerse una foto con los movimientos sociales en lucha hubiesen hecho una política de renacionalización de los servicios privatizados en los ayuntamientos que han tenido la oportunidad de gobernar, entre otras muchas cosas, entonces el escenario electoral sería completamente distinto.

En todo caso, con las elecciones del 12-J no se cierra nada. La lucha de clases se va a recrudecer en los próximos meses y años. Tanto el proceso de desindustrialización, como los ataques que seguirán golpeando los servicios públicos, las condiciones laborales y de vida de la inmensa mayoría, o las agresiones a los derechos democráticos pondrán aún más de manifiesto la necesidad urgente de construir una izquierda a la altura de la clase obrera, que sea capaz de dotarse de un programa combativo y revolucionario, y que se apoye en la lucha, las movilizaciones y las huelgas, para doblegar al PP, sus reaccionarias políticas de recortes y al sistema capitalista. ¡Únete a Esquerda Revolucionaria!

¡Es el momento de echar al PNV!

¡El 12J nuestro voto para EH Bildu y por un Gobierno de la izquierda que ponga fin a los recortes y los ataques a la clase trabajadora!



**Ezker
Iraultzailea**

El nerviosismo del PNV para celebrar cuanto antes las elecciones en la CAV es más que evidente. La derecha vasca teme que la movilización de la clase trabajadora y la juventud puedan poner en serio peligro su continuidad en el poder. Y no es ninguna exageración. Al tremendo éxito de la huelga general del 30 de enero y de otras luchas sociales, se le une el desastre de Zaldibar —todavía sin resolver y sin que en el Gobierno vasco asuma ninguna responsabilidad— y una indignación creciente contra la actuación del PNV durante el estado de alarma sanitaria.

La protesta de los trabajadores del hospital de Cruces ante la visita de Urkullu, la denuncia directa de los pensionistas al negocio de la privatización de las residencias, la oposición a la vuelta a clase de los sindicatos y la huelga estudiantil convocada por Ikasle Sindikatua...

son algunos de los ejemplos de una contestación muy real al PNV y que ahora más que nunca lo señala como el partido de la patronal, los recortes, la corrupción y la represión.

Una pandemia que ha galopado a lomos de los recortes del PNV

La crisis sanitaria ha sacado a la luz, una vez más, la auténtica cara del PNV. Su “oasis vasco” es el paraíso del negocio de unos pocos a costa de extender la precariedad y anteponer los beneficios a la salud de todos y todas.

El PNV ha sido pionero en la privatización de la sanidad, educación y los servicios públicos. Con respecto a sus políticas para dismantlar la sanidad pública —y que ha tenido consecuencias dramáticas en esta pandemia— los datos hablan por sí solos: desde 2007 a 2017 se han suprimido 900 camas, y hoy una cuarta parte del presupuesto destinado a la sanidad va a manos privadas mientras los recortes sanitarios en la CAV doblan la media estatal (un 10,54% frente a un 5,23%). El resultado ha sido evidente: falta de protocolos y ensayos, una eventualidad del 40%, la sobrecarga de trabajo y la tardanza en las pruebas PCR al personal sanitario... A lomos de estos recortes ha cabalgado la pandemia.

Han hecho de la privatización un negocio que lo manejan directamente todo tipo de excargos del PNV. Las puertas giratorias de los jeltzales son solo la punta del iceberg del entramado de corrupción que ha creado durante décadas. Las residencias privadas y empresas de sanidad son buena muestra de ello. Zaldibar destapó el caso de los vertederos, pero hay mucho más: industria, obras, las energéticas, investigación, polideportivos... la lista es interminable.

La Administración de Urkullu ha defendido ante todo los beneficios empresariales y les ha dado igual que la sanidad pública estuviera colapsada, el continuo contagio de los trabajadores sanitarios por falta de protección o los fallecimientos

en las residencias. Para el PNV lo verdaderamente importante no es la salud o las vidas de las familias trabajadoras, sino “evitar el coma económico” que pueda resentir sus bolsillos. Así ha sido, y así pretenden continuar ante la crisis.

El rechazo al acuerdo alcanzado por el PSOE, UP y EH Bildu para derogar la reforma laboral no es tampoco ninguna casualidad. Desde el 5 de marzo hasta el 20 de mayo, 26.967 empresas se han acogido a un ERTE en la CAV, afectando a 195.842 trabajadores. Tras haberse ahorrado 263,5 millones de euros en salarios a costa de los ERTE —cifra que supera el coste mensual de Osakidetza (Servicio Vasco de Salud)—, Confebask ha exigido alargarlos y extenderlos, y que las empresas no paguen las cotizaciones de la Seguridad Social. Claro que el PNV “no ve adecuado” derogar la reforma laboral, porque ahora es cuando la patronal más uso pretende darle y convertir muchos de esos ERTE en ERE, justificando los despidos por causas económicas y objetivas, y ahorrándose cientos de millones más.

Piden abiertamente rescatar con millones de euros del dinero público sus negocios y sus fortunas, endeudando las administraciones públicas y rebajando los impuestos a los empresarios. ¿Pero quién va a pagar la deuda? Está claro que las familias trabajadoras si no lo impedimos. Sus planes son más recortes en sanidad, educación, pensiones y salarios, exactamente igual que hicieron en 2008.

Podemos echar al PNV si fortalecemos la movilización y levantamos una política en beneficio de la clase trabajadora

La legislatura que ahora termina ha conocido la mayor conflictividad laboral desde los años de la Transición. La huelga general del 30E unificó los múltiples conflictos que ya habían estallado en 2019 por toda la geografía vasca, con cerca de 400.000 jornadas perdidas por huelga, la mayor actividad huelguística en veinte años y multiplicando por cuatro el número de jornadas de lucha de 2018.

Movilizaciones como la del metal de Bizkaia se han ligado a las manifesta-

ciones multitudinarias de los pensionistas, a las del movimiento feminista, a la de la juventud frente al cambio climático, en solidaridad con el pueblo catalán y los jóvenes de Altsasu, o por los derechos democráticos de Euskal Herria y de los presos vascos...

Este es el camino para echar a la derecha vasca de las instituciones y barrer sus políticas reaccionarias. Pero para eso es necesario que la izquierda abertzale y EH Bildu adopten una política de confrontación con el partido de la patronal vasca —en el parlamento y en la calle—. La ilusión de que se puede pactar con el PNV buscando “soluciones de país” no resiste la prueba de la práctica. Lo que necesitamos son “soluciones de clase”.

La experiencia del Gobierno de coalición entre el PSOE y UP también es aleccionadora. O se rompe decididamente con la lógica capitalista, se plantean medidas audaces en defensa de la clase trabajadora y se apela a la movilización de masas, o al final los grandes poderes económicos, el IBEX 35 y la banca imponen sus condiciones y determinan la política gubernamental. Las mínimas y tímidas reformas que se puedan hacer se convertirán en una gota en el océano si se sigue defendiendo a capa y espada el régimen capitalista del 78, si lo que se propone es la vía de la “unidad nacional” y la política de colaboración de clases.

Los marxistas de Ezker Iraultzailea llamamos a votar a EH Bildu el próximo 12 de julio con un claro objetivo: echar al PNV de las instituciones, cortar de raíz la colaboración de clases con la derecha vasca, y constituir un Gobierno con las fuerzas de la izquierda para romper con las políticas capitalistas.

Somos conscientes de que la abstención solo beneficiará a la derecha. Pero también sabemos que votar no basta. Es necesario levantar una alternativa en Euskal Herria para defender un programa revolucionario e internacionalista entre la clase trabajadora y la juventud, que plantee abiertamente la lucha por el socialismo junto a la defensa del derecho de autodeterminación. Para acabar con la catástrofe capitalista la clase trabajadora y la juventud debemos tomar la dirección de la sociedad.





Nuestra educación y nuestra salud no se negocian ¡Necesitamos un plan de rescate a la enseñanza pública ya!



Sindicato de
Estudiantes

Desde la suspensión de las clases presenciales al comienzo de la pandemia, la situación de emergencia social en la que se encuentra la educación pública se ha puesto de manifiesto como nunca. La falta de recursos —consecuencia de los recortes del PP que no han sido revertidos por el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos— ha tenido un resultado desastroso: miles de estudiantes de familias trabajadoras nos hemos visto privados de nuestro derecho a la educación en estos meses.

El riesgo al que se nos aboca en estos días con la celebración de las injustas pruebas de la EBAU, o la imposibilidad de garantizar una vuelta a clase en condiciones en septiembre señalan una necesidad urgente: el Gobierno debe rectificar de inmediato y aprobar un plan de rescate a la educación pública.

EBAU 2020: nuestra salud y nuestro futuro en juego

La pandemia ha obligado a tomar medidas excepcionales en todos los aspectos, empezando por cerrar los centros de estudio y confinarnos. Desde el Gobierno se insiste en que no se puede bajar la guardia y que debemos ser responsables para cumplir las medidas de seguridad, pero lo cierto es que su discurso entra en total contradicción con su práctica. A pesar de que desde el Sindicato de Estudiantes hemos reclamado insistentemente la suspensión de las pruebas de la EBAU, su respuesta ha sido hacer caso omiso:

217.000 estudiantes acudirán a facultades, pabellones e institutos en masa para realizar dichas pruebas, de las que depende nuestro futuro académico.

Los protocolos presentados por los Ministerios de Educación y Sanidad para garantizar la seguridad no son ninguna garantía. Así lo han advertido virólogos y científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) especializados en la lucha contra la Covid-19. Tal y como explicaba una investigadora del Centro de Biología Molecular del Hospital Severo Ochoa: “El porcentaje de la población vulnerable sigue siendo muy alto. (...) probablemente, tenemos diez veces más infectados, casos no reconocidos, que lo que refleja el recuento oficial. Es decir, si todavía hay muchas personas asintomáticas o con síntomas muy leves que pueden contagiar, ¿cuántos de ellos habrá entre los estudiantes que se presenten a la Selectividad? No lo sabemos”. Más claro imposible. Las aulas se podrán convertir en cuestión de horas en un foco de infección del virus.

La respuesta del Ministerio de Sanidad a esta preocupación creciente ha sido aprobar que todos aquellos estudiantes que hayan tenido síntomas compatibles o hayan contraído la enfermedad no podrán acceder a los centros educativos y por lo tanto no se podrán examinar, ¿qué pasará con su futuro académico? ¿Serán no presentados? ¿Suspendidos? ¿Tendrán que presentarse en septiembre perdiendo la convocatoria ordinaria? Se castiga doblemente a aquellos que han caído enfermos y que han tenido todavía más dificultades para poder seguir el curso escolar. Es un auténtico sinsentido.

Mantener la EBAU para ocultar la falta de plazas en la universidad pública

Se nos trata de convencer permanentemente de que estos exámenes son necesarios, inaplazables y casi sagrados. ¡Pero no es cierto! Su única razón de ser es la de ocultar la falta de plazas y de inversión en la universidad pública. Si hubiera plazas suficientes no habría motivo para hacer ninguna selección, ni para que hubiera notas de corte.

Es increíble que se nos arroje a esta situación de riesgo con la celebración de estos exámenes y que encima se argumente que no hay alternativa. ¡Claro que la hay! ¡La eliminación de la EBAU y la inversión de recursos suficientes para garantizar plazas en la universidad pública para todas y todos!

Esta competición no tiene nada que ver con lo académico. Todos los estudiantes que se presentan a la selectividad ya han probado sus conocimientos para acceder a la universidad. Se trata de una criba clasista, que castiga a los estudiantes de familias trabajadoras y beneficia a aquellos con más recursos económicos, los que tienen a su alcance academias privadas, clases particulares, viajes al extranjero para aprender inglés, buena conexión a internet... y todos los medios necesarios para superar cualquier dificultad.

Y una vez más se evidencia que somos siempre los mismos, los que venimos de familias humildes, las verdaderas víctimas de los recortes sociales —empezando por los realizados en nuestros centros de estudio—, y ahora encima se profundiza se acelera nuestra expulsión del

sistema educativo por razones puramente económicas.

La única solución real para septiembre: un plan de rescate a la educación pública

Es imposible afrontar el próximo curso en condiciones si no se termina con la situación ruinoso de la educación pública. Las declaraciones del Ministerio de Educación proponiendo clases presenciales por turnos, o relajando su propuesta inicial de ratios de 15 alumnos a 20 o 25 no han hecho más que aumentar la preocupación de toda la comunidad educativa.

La respuesta del Gobierno ha sido anunciar el desembolso de 2.000 millones de euros a las comunidades autónomas para la educación pública. Según cálculos de CCOO, la inversión necesaria para afrontar la situación abierta por la pandemia sería de 7.385 millones de euros. Es decir, que esos 2.000 millones son más que insuficientes y ni siquiera alcanzan para remontar lo recortado por el PP.

Necesitamos un escudo social, en el que la prioridad sean nuestros derechos y no las exigencias de la patronal. Eso es lo que debe defender un Gobierno de la izquierda. Solo hay una forma de asegurar una vuelta a clase en condiciones de seguridad para nuestra salud y que permita una educación de calidad: un plan de rescate que garantice la inversión del 7% del PIB en la enseñanza pública, fin inmediato de los conciertos con la privada, ratios de 15 alumnos por aula, contratación de más de 165.000 profesores, habilitación de espacios y la gratuidad de la educación pública desde infantil a la universidad.



¡Por un movimiento LGTBI revolucionario y anticapitalista!

La represión, el maltrato, la marginación y la opresión que vivimos las personas LGTBI siguen siendo realidades muy vivas. Al igual que el machismo, el racismo o la explotación laboral, la lacra de la LGTBIfobia se ha profundizado en medio de la crisis capitalista. Por eso hoy es más necesario que nunca retomar las tradiciones más combativas del movi-

miento LGTBI, recordar las revueltas de Stonewall y las movilizaciones contra la opresión sexual durante el franquismo.

El avance electoral de la extrema derecha ha envalentonado a los sectores más reaccionarios de la sociedad que no dudan en atacar abiertamente nuestros derechos y lo que somos. Los gobiernos de los ultraderechistas Trump, Bolsonaro, Putin o Modi son un buen ejemplo de esta amenaza y de la necesidad de combatirla de forma militante.

Entrevista a Ana García,

portavoz de Libres y Combativas, multada con 700 euros tras la manifestación del 8M de 2019

Libres y Combativas es una de las organizaciones feministas con más presencia entre la juventud del Estado español. Fue la primera organización que llamó a parar las clases contra la violencia machista ya en 2017 con motivo del 8 de Marzo. Desde entonces no solo han paralizado institutos y universidades los 8 de Marzo sino que también han llenado las calles contra la sentencia de la Manada, exigiendo una asignatura de educación sexual inclusiva y en libertad, o apoyando las reivindicaciones del colectivo LGTBI.

Entrevistamos a su portavoz estatal, Ana García, tras ser sancionada con una multa de 700 euros por llevar megafonía en la histórica manifestación del 8M en 2019. Libres y Combativas acaba de lanzar una campaña de protesta para exigir la retirada de esta sanción y pide solidaridad al movimiento.

EL MILITANTE.- No es el primer ataque que sufrís por vuestra actividad en defensa de los derechos de la mujer, pero normalmente han venido por parte de la derecha, ¿qué opináis de que sea la Delegación del Gobierno en Madrid, del PSOE, quien firma esta multa?

Ana García.- Es realmente sorprendente e incomprensible que sea el PSOE, que tantas veces se ha declarado defensor de los derechos de la mujer, quien nos sancione.

Hemos soportado muchos ataques provenientes de las filas del PP y de Vox porque somos parte de un movimiento cada vez más fuerte que ellos temen. Un movimiento que apunta directamente a los pilares del sistema que ellos defienden y que es la causa de nuestra opresión: el capitalismo. Es la desesperación de esos sectores tan reaccionarios, ante la fuerza de millones de mujeres trabajadoras y jóvenes, la que motiva estos ataques. Yo misma he recibido toda clase de insultos de carácter vejatorio en las redes por parte de los seguidores de Vox. Son los que imponen sus sentencias franquistas y machistas y protegen a quienes nos agreden. Son los mismos que ahora tratan de culpar al movimiento feminista de la pandemia de la Covid-19 y que han movido sus hilos en el aparato de Estado para articular esta ridícula campaña. No nos sorprende en absoluto que actúen así.

Pero otra cosa muy distinta es lo que ha ocurrido con esta multa. Es una contradicción completa que este Gobierno se declare feminista y luego multe a quienes peleamos cada día por los derechos de las mujeres. ¡Lo hace además amparándose en la nefasta Ley Mordaza! Es muy grave.

EM.- ¿Cómo vais a responder a esta sanción?

AG.- Ya tuvimos una reunión con la Delegación del Gobierno en Madrid el año pasado. Una reunión que solicitamos para denunciar la actuación policial de la que fuimos víctimas cuando nos disponíamos a montar nuestro cortejo en la manifestación unitaria de ese 8M. Como siempre hacemos, llevamos nuestra megafonía, pancarta..., pero a diferencia de otras ocasiones fuimos interceptadas por la policía en una actitud machista y muy intimidatoria, y nos bloquearon el camión, impidiéndonos incorporarnos a la manifestación. Cuando pedimos explicaciones se nos negaron de la peor manera, nos arrancaron las llaves del contacto del vehículo y nos retuvieron allí durante varias horas.

Ya habíamos recibido la notificación de la sanción, por lo que también les trasladamos nuestra queja y se nos conminó a recurrirla por los trámites pertinentes. Después de haberla recurrido ya dos veces, se vuelve a insistir en que tenemos que pagarla y que solo queda la posibilidad de que presentemos un recurso de alzada ante el ministro de Interior.

Por supuesto que haremos el recurso, pero si algo hemos aprendido en estos años de lucha ha sido que las injusticias, las sentencias machistas..., se cambian en las calles, con la movilización y la presión social. Por eso estamos denunciando este atropello a la libertad de expresión y a los derechos democráticos más elementales de quienes mantene-

mos una lucha implacable contra cualquier tipo de opresión.

Hemos lanzamos una campaña de protesta exigiendo al ministro de Interior, Grande-Marlaska, a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y por supuesto al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, la retirada inmediata de la sanción. Para ello hemos publicado un manifiesto y estamos recabando firmas de apoyo entre el movimiento feminista, los movimientos sociales, las mareas, sindicalistas y, por supuesto, desde aquí, os animamos a difundirlo.

Esta sanción supone un ataque no solo contra Libres y Combativas, sino contra el conjunto del movimiento feminista y a todos y todas las que batallamos día a día por no retroceder en los derechos que tanto costó conquistar.

Si este Gobierno realmente defiende los derechos de las oprimidas debe demostrarlo en la práctica. Por supuesto, retirando esta multa injustificable, pero sobre todo llevando a cabo políticas que confronten totalmente con los responsables de nuestra opresión: con la patronal, la jerarquía de la Iglesia Católica, los franquistas y machistas incrustados en el aparato del Estado. En esa batalla nos tendrán a su lado, pero es nuestra obligación señalar que por ahora no lo están haciendo y esta sanción es una prueba más de ello.

▶ [Pincha aquí para firmar y enviar la RESOLUCIÓN DE APOYO](#)

▶ www.sindicalistasdeizquierda.net

Marlaska sustituye a Pérez de los Cobos por el responsable de los despidos por motivos ideológicos en los aeropuertos



“Es una contradicción completa que este Gobierno se declare feminista y multe a quienes peleamos cada día por los derechos de las mujeres”



Solidaridad con las trabajadoras del servicio de limpieza del Gregorio Marañón

¡No a la privatización! ¡Ayuso dimisión!



José Antonio López
Izquierda Revolucionaria
Madrid

El 3 de junio se anunció la privatización del servicio de limpieza del Hospital Universitario Gregorio Marañón, uno de los hospitales de referencia de la Comunidad de Madrid (CAM), afectando a más de 33.000 metros cuadrados que contienen un 87% de “áreas sanitarias críticas o semicríticas”.

Con esta medida, adoptada con un absoluto secretismo y desmentida inicialmente por el Gerente del Hospital, ya serían 19 los hospitales de Madrid con servicios de limpieza privatizados para garantizar los negocios de multimillonarios como Florentino Pérez. Esta decisión pone en el punto de mira a las 550 trabajadoras que hasta ahora formaban parte de la bolsa pública de empleo.

El sector de limpieza es uno de los más precarios en los hospitales madrileños, incluso entre las trabajadoras de la bolsa pública. Con la privatización, las plantillas han sufrido un continuo proceso de precarización laboral y un aumento de los ritmos de trabajo, al reducirse el número de operarias. Algo que además ha ido en detrimento del servicio.

Nos encontramos ante un sector feminizado, que sufre un gran desgaste físico, con ritmos de trabajo brutales, cubriendo zonas para las que no dan abasto y conviviendo con patologías como el síndrome del túnel carpiano, lumbalgia o artritis fruto de su actividad laboral. Durante la pandemia se han jugado la vida en hospitales abarrotados de pacientes, expuestas a crisis de ansiedad y depresión al encontrarse en la primera línea de batalla. Ahora el Gobierno de Díaz Ayuso las paga con la privatización, la precarización y posiblemente el despido de muchas de ellas. ¡Es una vergüenza!

¡Basta de hacer negocios a costa de la sanidad pública!

Estas limpiadoras realizan una función de vital importancia, invisibilizada y ninguneada. Sin una adecuada limpieza, el trabajo del resto de profesionales sanitarios sería completamente estéril. De hecho, la privatización de la limpieza en los hospitales está vinculada a una mayor tasa de infecciones.

No solo es inaceptable que sigan privatizando servicios como la limpieza, sino que es necesario recuperar los servicios que ya están en manos privadas, incorporando sus plantillas a la red pública, reforzándolas, y acabando con la enorme precariedad laboral y salarial existente. Así sí se garantizaría una sanidad pública de calidad de cara a enfrentar uno o más rebrotes. Pero a Díaz Ayuso y a su Gobierno no les importa nada de esto, ¡solo los negocios de sus amiguetes!

El PP, Ciudadanos y Vox gestionan la CAM como un cortijo privado, garantizando beneficios multimillonarios a empresarios afines con dinero público. Es lo que ha ocurrido con el hospital de campaña del Ifema, que acumula 18,5 millones de euros en adjudicaciones a empresas como CLECE, de Florentino Pérez, o con los hoteles medicalizados, un jugoso negocio para el sector hotelero. Incluso en medio de una tragedia como esta, como hemos conocido respecto a las residencias de mayores con la llamada “Operación bicho”, estos individuos no dejan de buscar cómo sacar tajada. No tienen ningún escrúpulo.

El Gregorio Marañón lleva una década en el punto de mira. Ha perdido 379 camas disponibles desde 2008, un 20%. En paralelo, su plantilla se ha reducido en un 14% en los últimos diez años. Una reducción que no se explica por una menor presión asistencial, dado que el nú-

mero de personas atendidas por los servicios de urgencias aumentó de 224.000 pacientes hasta 251.000 entre 2012 y 2018.

Servicios como la limpieza también se han visto afectados por esta situación. Algo que se agravará, como ocurre siempre, con la privatización. Tanto el gerente del hospital, Joseba Barroeta, como otros dos altos cargos, Carmen Oñate y José María Blanco, actúan para garantizar la privatización. Por eso, tal y como piden las trabajadoras, deben dimitir inmediatamente.

¡Sí se puede parar la privatización!

Tal y como demostró la Marea Blanca, estos ataques se pueden revertir, pero solo con una movilización decidida y contundente. Por eso mismo es necesario que los sindicatos, especialmente CCOO, UGT y CGT, y los sindicatos combativos de la sanidad como MATS y AMYTS, impulsen la movilización contra la privatización en el Gregorio Marañón con un plan de lucha contundente que incluya:

1) Un calendario de paros con unos servicios mínimos determinados por las

propias trabajadoras, para evitar que estos se utilicen para impedir el ejercicio del derecho a huelga. El Ministerio de Trabajo, en manos de Unidas Podemos, debe garantizar este derecho e impedir decisiones arbitrarias por parte de la CAM. Elección de un Comité de Huelga democrático en las propias asambleas de trabajadoras. Campaña pública dirigida a los pacientes, familiares y vecinos con el objetivo de obtener solidaridad y apoyo económico.

2) Asambleas de todo el personal del hospital Gregorio Marañón para expresar la solidaridad con las trabajadoras de la limpieza, acordar acciones concretas y paros que apoyen su lucha e impulsar una Caja de Resistencia que permita sostener la huelga.

3) Reuniones con el personal de los servicios de limpieza privatizados del resto de hospitales, con el objetivo de concretar acciones conjuntas para frenar la privatización en el Gregorio Marañón y pelear por la recuperación de dichos servicios para la red pública en las siguientes condiciones: mantenimiento de todo el empleo, incremento drástico de plantillas, salarios y condiciones laborales dignas, reducción de la jornada laboral manteniendo los salarios y reconocimiento de todas las enfermedades profesionales.

4) Organizar e impulsar una huelga general de la sanidad pública madrileña, tanto de sanitarios como de servicios asociados (limpieza, cocina, lavanderías, etc.), aprovechando tanto la lucha del Gregorio Marañón como la huelga de médicos residentes prevista a partir del 13 de julio. Una huelga con el objetivo de revertir todos los recortes y privatizaciones. ¡Basta de lucrarse a costa de nuestra salud!

Necesitamos echar al Gobierno de Díaz Ayuso y sus políticas de recortes y privatizaciones. Las fuerzas de izquierdas en la Asamblea de Madrid, y especialmente Unidas Podemos y Más Madrid, deben exigir ya la dimisión de Díaz Ayuso y su Gobierno. No basta con pedir en el Parlamento madrileño una comisión de investigación sobre lo que ya resulta evidente.

El Gobierno central debe tomar cartas en el asunto e intervenir, comenzando por frenar esta privatización y garantizando unos servicios de limpieza en la sanidad 100% públicos y de calidad. Tras la masacre que se ha producido en Madrid, y tras todo lo que estamos conociendo, hay razones más que de sobra para tomar el control de la sanidad y las residencias y procesar al corrupto Gobierno de Ayuso y a sus colaboradores. ¡La sanidad pública no se vende, se defiende!

► www.izquierdarevolucionaria.net

Nuevo ERTE en Arcelor Mittal ¡Tenemos fuerza para frenar los ataques!



Basta de persecución sindical en IMA Ibérica-Prestima

Jamal Kessou, presidente del Comité de Empresa, despedido por oponerse al ERTE



Twitter: @cgt_ima
Facebook: CGT Prestima - IMA Ibérica

SINDICAL

JULIO-AGOSTO 2020 • EL MILITANTE 15

“El despido es un gesto de venganza por no aceptar que hagan lo que quieran con las y los trabajadores”

La multinacional IMA Ibérica-Prestima presta servicios de asistencia a empresas como Lagun Aro, Sanitas, Seguros Ocaso, Línea Directa o Autoclub Mutua, tras imponer un ERTE fraudulento rechazado por la mayoría del comité de empresa, ha dado un paso más en sus ataques a los derechos laborales y sindicales. Pocos días después notificó al presidente del comité, Jamal Kessou, su despido por dañar la imagen de la empresa. La razón: enviar una carta a varias empresas clientes informando sobre el ERTE y sus consecuencias, entre ellas un posible perjuicio del servicio por la disminución drástica de la plantilla.

Entrevistamos a Jamal Kessou, y a Aitzol Arribillaga, delegado por CGT y miembro de Izquierda Revolucionaria.

EL MILITANTE.- ¿Por qué se produce tu despido?

Jamal Kessou.- Los problemas empiezan cuando anunciamos que íbamos a denunciar el objetivo de la empresa de implantar una plataforma low cost en Portugal que iba a suponer una amenaza para nuestros puestos de trabajo y condiciones laborales.

A partir de ese momento la multinacional intenta en todo momento quitarnos derechos: acabar con el plus de experien-

cia, que estaba recogido en el convenio, ampliar la edad para trabajar en el turno de noche a personas de más de 50 años o que la nómina esté vinculada a objetivos.

El despido es un gesto de venganza por estas y muchas otras cosas, pero fundamentalmente por no haber aceptado que puedan hacer con las y los trabajadores lo que quieran.

Hemos luchado por tener los mismos derechos que tienen el resto de filiales. Si nosotros estamos peor se utilizarán nuestras condiciones más precarias para justificar recortes en otras zonas. Por eso hay que defender nuestras condiciones frente a cualquier recorte aquí, en Francia o en Portugal.

Aitzol Arribillaga.- Nos encontramos ante un gravísimo ataque sindical. La empresa justifica el despido del presidente del comité por haber dañado su imagen. Con este argumento mañana no se podrían hacer campañas públicas que denunciaran los abusos empresariales, recogidas de firmas, e incluso no se podría publicitar una huelga. Esta multinacional está cercenando los derechos sindicales y el derecho fundamental a la libertad de expresión.

EM.- ¿Por qué habéis rechazado la aplicación del ERTE?

JK.- Incluso la UGT, que lo ha firmado, reconoció hasta el final que no veía las causas. Señalaron que el ERTE era por motivos organizativos y les hemos planteado que el problema es que hay más jefes que

técnicos, más de 27 cuadros con salarios muy importantes. Nuestra filial es la que menos repercusiones ha sufrido por el Covid-19 habiendo caído solo entre un 2 y un 3%. El informe pericial para justificar el ERTE señalaba incluso la posibilidad de nuevos contratos y líneas de negocio.

Resulta surrealista que en un informe para justificar un ERTE se señale esto. El sector de seguros es uno de los sectores más fuertes y lucrativos junto a los bancos. Por otro lado, al tiempo que se planteaba el ERTE se denunció el convenio de empresa, que llevaba más de 15 años caducado.

AA.- La realidad es que la empresa tiene planes globales de reestructuración y la crisis del Covid-19, como a muchas otras empresas, le ha venido muy bien. Ya antes de la pandemia hubo un intento de implantar el Plan 2020 que suponía recortes muy importantes, entre ellos respecto al disfrute de nuestras vacaciones. Este plan se tumbó cuando la mayoría de la plantilla votó contra el mismo y en favor de convocar una huelga. La empresa lo retiró antes de que se iniciara el paro. Ahora están aprovechando para implementar en parte este plan. Ante del ERTE, en pleno confinamiento, llamaron a muchos trabajadores y les obligaron a coger una semana o más de vacaciones.

La empresa, en los meses de verano, contrata personal hasta el punto de duplicar la plantilla. Solo con dejar de realizar estas contrataciones se podía sin problema evitar el ERTE. Obviamente les dio igual, ya que lo que plantean son ajustes que ya tenían en mente antes de la pandemia.

EM.- ¿Cómo estáis respondiendo al despido y al resto de ataques?

JK.- Hemos convocado durante y después de la negociación del ERTE asambleas informativas para que el personal tenga conciencia y conocimiento de todo, y para trasladar que no se trata solo del ERTE. Se están implementando cambios de jornadas ilegales y no ha habido negociación de un contrato con el teletrabajo, viéndose obligada la gente a pagar de su bolsillo la conexión a internet o el incremento de gastos en electricidad, que a su vez la empresa se ahorra, o no facilitando las sillas ergonómicas de cara garantizar nuestra salud.

A nivel legal estamos impugnando el ERTE ya que lo han negociado con la sección sindical de UGT, que actualmente tiene 3 delegados de los 12 que hay, en vez de negociarlo con el comité de empresa. Estamos haciendo público el conflicto con comunicados en Facebook, en Twitter o en Instagram, y hablando con las demás filiales de Bélgica, Francia, Italia.

AA.- Es importante entender que nuestra mayor fuerza es la denuncia pública, y la movilización y la huelga. La negociación por sí misma, si no se acompaña de esto, es impotente. Por eso mismo necesitamos reivindicar un sindicalismo que plante cara a la lógica capitalista.

Yo estoy organizado en Izquierda Revolucionaria; esta militancia es lo que me permite contar con sólidos argumentos para impulsar un sindicalismo combativo y de clase.

El Corte Inglés, condenado por vulnerar la libertad sindical de delegados de Sindicalistas de Base



Felipe Boluda
Secretario general
Sindicalistas de Base en
El Corte Inglés · Goya

El pasado mes de junio el Juzgado de lo Social Nº 15 de Madrid condenó a El Corte Inglés (ECI) por vulneración de la libertad sindical. El centro de Castellana (Madrid) ha tenido que restituir en su puesto de trabajo a una delegada sindical y miembro del comité de empresa y al delegado de la sección sindical, ambos de Sindicalistas de Base. Así mismo ha tenido que indemnizar a SB con 1.250 euros.

ECI, practicando la política antisindical que siempre ha aplicado, incluyó

a estos delegados en el ERTE de fuerza mayor que presentó en marzo, sin respetar la prioridad de permanencia en la empresa de la representación legal de los/as trabajadores/as, tal y como establecen los artículos 47 y 51 del Estatuto de los Trabajadores. Y esto lo hizo cuando en 2019 obtuvo un 20% más de beneficios que en el ejercicio anterior, logrando su mayor beneficio en nueve años.

Sindicalistas de Base tiene constituidas sus secciones sindicales en El Corte Inglés de Goya y Castellana, en Madrid, y en Tenerife, con representación en los comités de empresa de Castellana y Tenerife. Ha mantenido una defensa intransigente de los derechos laborales de la plantilla, su firmeza y combatividad

contrastan con el “sindicalismo amarillo” practicado por FASGA y FETICO, y que lamentablemente cuenta con la colaboración de CCOO y UGT.

Es evidente que a ECI le incomoda nuestra existencia y pretende amedrentarnos, pero no lo va a conseguir. Seguiremos peleando porque la lucha es el único camino.





La lucha en un momento decisivo

¡Ocupar las plantas hasta conseguir la nacionalización!



Comunicado conjunto de Izquierda Revolucionaria, Sindicato de Estudiantes y Sindicalistas de Izquierda

Los trabajadores y trabajadoras de la plantilla principal y de las subcontratas y proveedores de Nissan han salido a las calles en repetidas ocasiones para defender los 23.000 puestos de trabajo. En todas ellas han recibido un apoyo entusiasta de la población. Pero la empresa no se ha movido y sigue adelante con sus planes. Estamos pues ante un momento decisivo. Si la lucha no da un paso al frente, se corre el riesgo de salir derrotados. Pero todavía estamos a tiempo si se toman medidas contundentes y se convierte esta lucha en un eje de la movilización social en Catalunya y en todo el Estado.

¡Ocupar las plantas y poner en marcha un plan de lucha contundente!

El tiempo de las medias tintas y la negociación con la empresa ha pasado. Igual que el de las buenas palabras del Ayuntamiento, de la Generalitat y del Gobierno central. Ya sabemos por experiencia como acabará si no damos un giro de 180 grados al enfoque de esta batalla: con toda la plantilla en la calle y negociando indemnizaciones. Será el ¡sálvese el que pueda!

Hay que actuar allí donde más presión podemos hacer sobre la empresa y la administración. ¡Ocupar ya todas las plantas y ponerlas bajo el control de los trabajadores! Esta medida es fundamental para evitar el desmantelamiento del equipo y para poner a producir la empresa inmediatamente.

Algunos dirán que esto es una locura. Pero no lo es. Si atendemos a las grandes luchas de los años setenta, donde se forjaron muchos sindicalistas y la clase obrera obtuvo grandes victorias, las ocupaciones de fábricas eran lo normal. Y daba siempre buenos resultados. Tenemos que hacer memoria y acordarnos de cómo se conquistaron los derechos que hoy la patronal nos arrebató. Y se lograron con un sindicalismo combativo, decidido a luchar hasta el final.

Si se ocupan las plantas la lucha de Nissan se convertirá en una referencia para el movimiento obrero en el Estado español e internacionalmente.

¡Que no se lleven ni un tornillo! ¡Nacionalización sin indemnización ya!

Ocupar las plantas, y exigir con rotundidad la nacionalización, sin indemnización, de Nissan y que pase a titularidad

pública bajo el control democrático de las plantillas. Es posible, al menos igual que dedicar decenas de miles de millones del presupuesto público a subvencionar a las grandes empresas como se ha hecho en los años pasados.

La nacionalización y socialización de las plantas de Nissan es perfectamente posible y sería completamente viable si las ganancias en lugar de engordar los beneficios de un consejo de administración de multimillonarios, sirviera para asegurar la producción, la tecnología y la reinversión. Además, permitiría la formación de una gran empresa pública del sector automovilístico que integrara también a los trabajadores y trabajadoras de subcontratas y proveedores con el mismo salario y los mismos derechos, y asegurar así un empleo digno para todos y todas.

El Gobierno del PSOE-UP está en condiciones de llevarlo a cabo si tiene voluntad política. ¿Quién se opondría a una medida así para salvar 23.000 empleos? La patronal y la derecha, pero la inmensa mayoría de la clase obrera la apoyaría de manera entusiasta.

Los sindicatos presentes en Nissan, tanto en la principal como en las subcontratas, deben impulsar una huelga general en la provincia de Barcelona, a más tardar para la primera quincena de julio. Una acción así colocaría una presión formidable sobre la empresa, la Generalitat y el Gobierno central y encontraría un apoyo unánime en todas las empresas, grandes, medianas y pequeñas, y de todos los colectivos y organizaciones comprometidas con la causa de los trabajadores.

Es el único camino para evitar una derrota. Hay que unir nuestras fuerzas y convencer a los sindicatos y los comités de Nissan a que se pongan manos a la obra y nos dejemos de fórmulas que han fracasado y fracasarán. Es el momento de recordar cómo hacían nuestros padres y nuestros abuelos, y llevar la lucha hasta el final.

¡Preparar la huelga general en la provincia de Barcelona!

